

Inexcusable retraso de transferencias de recursos

El funcionamiento del Estado descansa, en gran medida, en una premisa básica: que los compromisos asumidos se paguen oportunamente. Cuando ese principio se altera, los efectos se extienden más allá de las planillas contables y terminan golpeando a proyectos, empresas y comunidades completas.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el retraso en la transferencia de recursos desde la dirección de Presupuestos al gobierno regional de Magallanes. Aunque finalmente se concretó el envío de \$15 mil millones para saldar la deuda flotante acumulada al cierre del año pasado, aún permanecen pendientes otros \$12 mil millones correspondientes a compromisos generados durante los primeros meses del presupuesto vigente. En términos administrativos, puede tra-

tarse de un desfase en los flujos de caja del nivel central. Pero en la práctica, para las regiones, estos retrasos tienen consecuencias muy concretas.

Los gobiernos regionales ejecutan buena parte de su inversión pública a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), mecanismo que financia obras que impactan directamente en la calidad de vida de las personas. Cuando las transferencias se ralentizan, lo que se pone en riesgo no es sólo el cumplimiento de una obligación financiera, sino también la continuidad de proyectos largamente esperados.

En Magallanes, varios de esos proyectos forman parte del desarrollo urbano y social de la región: la construcción de la Biblioteca y Archivo Regional, la nueva Primera Comisaría de Carabineros en los terrenos del exregimiento Pudeto o el cierre de las obras del Cesfam 18 de Sep-

tiembre. Son iniciativas con alto grado de avance y con compromisos contractuales que deben cumplirse.

Pero el problema no termina allí. Los retrasos afectan también a empresas constructoras, muchas de ellas pequeñas y medianas, que dependen del pago oportuno de los estados de avance para cumplir con sus propios compromisos laborales, tributarios y financieros. Cuando el flujo se interrumpe, la cadena completa comienza a tensionarse.

La situación, además, no es exclusiva de Magallanes. Otros gobiernos regionales han enfrentado dificultades similares en medio de un escenario fiscal más estrecho, marcado por el déficit informado por el ministerio de Hacienda. Sin embargo, que el problema sea nacional no reduce su impacto local.

Las regiones requieren certezas para planificar y ejecutar su inversión pública. La

descentralización -tan reiterada en el discurso político- también implica asegurar que los recursos comprometidos lleguen en tiempo y forma a los territorios encargados de administrarlos.

En territorios extremos como Magallanes, donde los costos de construcción son mayores y los proyectos enfrentan condiciones logísticas complejas, cualquier retraso puede traducirse en paralizaciones, sobrecostos o pérdida de confianza entre el sector público y privado.

Por eso, más allá de las explicaciones técnicas, lo importante es que los flujos se normalicen cuanto antes. La inversión regional no es un gasto abstracto. Se traduce en bibliotecas, centros de salud, infraestructura pública y empleo local. Y cuando esos recursos se retrasan, lo que realmente se posterga es el desarrollo de la región.